

Fecha: 18-01-2026
Medio: El Mercurio de Valparaíso
Supl. : El Mercurio de Valparaíso - Edición Especial
Tipo: Noticia general
Título: Crecimiento, crisis hídrica y regulación: la agenda sostenible que espera al nuevo gobierno

Pág. : 4
Cm2: 667,1

Tiraje: 11.000
Lectoría: 33.000
Favorabilidad: No Definida



Error al crear la imagen

En esa línea, Rodríguez sostiene que la tensión entre crecimiento y protección suele ser "un falso dilema" cuando las reglas son borrosas, porque se termina sin inversión ni buena protección. "Lo kafkiano del sistema hace que el interesado esté más preocupado de la permisología eterna que de gestionar eficazmente los impactos relevantes", afirma.

El ejecutivo identifica focos de conflicto en infraestructura estratégica como puertos, ferrocarriles, vivienda o minería, y propone una regulación "clara, exigente y predecible", donde se definan tempranamente criterios, actores y plazos. En agua, plantea que "la seguridad hídrica es una prioridad para el país" y que se requiere infraestructura -embalses, desalación, reutilización- junto con protección de cuencas y fortalecimiento técnico de la Dirección General de Aguas. En energía, defiende un sistema "diversificado, robusto y predecible", bajo el principio de neutralidad tecnológica.

Desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena sitúa los desafíos en tres grandes frentes: aire, agua y residuos. "Lo que queda pendiente es la implementación del plan de descontaminación y la aplicación de la nueva norma de calidad de aire (...) Va a ser fundamental acelerar el trámite y así realmente rebajar la mortalidad prematura", afirma. A ello suma la urgencia de normas de calidad de agua frente al aumento de eventos de algas por mayor temperatura y nutrientes, y el problema estructural de la basura: "Muchos rellenos sanitarios están terminando su vida útil incluyendo la región de Valparaíso (...) y por tanto va a ser fundamental enfrentar el flagelo de la basura dentro de esta próxima administración".

Sobre la capacidad del Estado, Mena observa que el país está mejor preparado en crisis hídrica tras la reforma al CÓ-



digo de Aguas, que permite priorizar usos esenciales. Y agrega que el cambio climático no es sólo un imperativo moral, sino "un imperativo también económico y social, entendiendo que el cambio climático erosiona los avances del crecimiento económico y multiplica las inequidades". En su análisis, los gobiernos de derecha tienden a usar instrumentos económicos más que normativas de comando y control, dentro de un marco legal que ya impone obligaciones climáticas a las empresas.

Desde el mundo productivo regional, la Asociación de

Empresas Región de Valparaíso (ASIVA) sitúa el debate en términos de gobernanza. Su presidente, Alfonso Salinas, afirma que en Quintero-Puchuncaví "el desafío no es castigar la actividad industrial, sino ordenar mejor la gestión ambiental, eliminar duplicidades (...) y avanzar hacia esquemas colaborativos, eficaces y creíbles". En agua, destaca la oportunidad de la desalación para avanzar hacia una gestión integrada de cuencas, y en Cambio Climático pone énfasis en una implementación técnica de la nueva institucionalidad de biodiversidad que permita prevenir incendios sin generar más burocracia.

Respecto del SEIA, Salinas es directo: "el problema no es que el sistema incorpore exigencias ambientales (...) el problema es que no está siendo suficientemente eficiente ni focalizado". Cita proyectos como Maratué o Las Salinas, entrampados por largos procesos y judicialización, y sostiene que se requiere avanzar hacia evaluaciones proporcionales, focalizadas y con plazos claros. "Compatibilizar crecimiento y medio ambiente exige reglas claras, estándares exigentes, decisiones oportunas y un Estado que funcione mejor", concluye. ■



"El principal desafío es cambiar el equilibrio: se requieren estándares exigentes, pero decisiones previsibles y oportunas. La necesaria protección ambiental no puede terminar siendo, por mal diseño institucional, una fábrica de frustración ciudadana, inversión congelada y conflicto permanente".

Juan Pablo Rodríguez
 Director Ejecutivo
 Fundación Piensa